



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)**

Demandante : JOSÉ ELIECER ZULUAGA PINEDA  
Demandado : UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA  
Radicado : 05001 31 05 010 2017 00641 01  
Sentencia : S-195

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de Consulta a favor del demandante, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de agosto de 2021.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

JOSÉ ELIECER ZULUAGA PINEDA demandó a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, para que una vez se declare la existencia de una relación laboral entre las partes desde el mes de enero de 1976 hasta el 25 de julio de 2005 cuando renunció, sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por acreditar 20 años de servicio y 60 años de edad a partir de su retiro

del servicio, con una cuantía equivalente al 75% del salario promedio del último año de servicios; de manera subsidiaria, pretende la pensión proporcional de jubilación o la pensión de vejez contemplada en el Decreto 758 de 1990, junto con los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 15 de octubre de 1941; que prestó sus servicios de forma personal, subordinada y discontinua a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA en calidad de docente o profesor y decano de la Facultad de Contaduría Pública; que tales servicios fueron prestados entre el mes de enero de 1976 y el 25 de julio de 2005 cuando renunció; que durante todo el tiempo que duró la vinculación le fueron pagadas las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, primas especiales y vacaciones, las cuales eran liquidadas anualmente; que los servicios como Decano fueron prestados desde el 15 de febrero de 1979 hasta el 18 de enero de 1982; que nunca fue afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ni a ningún fondo de pensiones; y que es beneficiario del régimen de transición y le es aplicable el Decreto 758 de 1990.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICA se opuso a las pretensiones de la demanda por falta de apoyo fáctico y jurídico. Señala que nunca existió un contrato de trabajo entre las partes, sino varios contratos por períodos académicos por horas semanales de cátedra, los cuales, en su mayoría, eran desarrollados por dos semestres académicos que equivalen a 10 meses. Dice estar dispuesta a pagar el respectivo cálculo actuarial por las semanas no cotizadas, pero sostiene que la obligación de cotizar cesó a partir del 15 de octubre de 1991 cuando el demandante se pensionó con el

Municipio de Medellín, sin que sea cierta su calidad de beneficiario del régimen de transición ya que nunca solicitó afiliación alguna al sistema. Como excepciones propuso cumplimiento de la ley y la jurisprudencia sobre vinculación docente de profesores de educación superior, falta de requisitos mínimos para consolidar cualquiera de las pensiones solicitadas, improcedencia de la pensión de jubilación demandada, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, pago de lo no debido, falta de vigencia de la Ley 171 de 1961, pago e inexistencia de la obligación de cotización por estar jubilado desde el 15 de octubre de 1991.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 11 de agosto de 2021, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ que el demandante prestó sus servicios de manera ininterrumpida a la demandada entre el mes de enero de 1976 hasta el 25 de julio de 2005 mediante contrato de trabajo como docente de cátedra, pero la ABSOLVIÓ de todas las pretensiones formuladas en su contra, imponiendo al demandante el pago de las costas del proceso, cuyas agencias en derecho fueron fijadas en el equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente.

Conoce la Sala del asunto por **CONSULTA** a favor del demandante.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Los apoderados de las partes se abstuvieron de presentar alegatos de conclusión en esta instancia.

### **CONSIDERACIONES:**

Según viene de verse, el señor JOSÉ ELIECER ZULUAGA PINEDA pretende, de manera principal, el reconocimiento de la pensión de

jubilación por el hecho de haber acreditado el cumplimiento de 60 años de edad y haber prestado sus servicios como docente hora cátedra al servicio de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA por más de 20 años, concretamente entre el mes de enero de 1976 y el 25 de julio de 2005, tiempo durante el cual la demandada no lo afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES o a cualquier otra entidad, ni realizó los aportes en pensiones que le correspondía. Subsidiariamente pretende que esa pensión sea reconocida de forma proporcional o que se reconozca la de vejez contemplada en el Decreto 758 de 1990.

Atendiendo al grado jurisdiccional de CONSULTA en el que se conoce del proceso, corresponderá a la Sala verificar la legalidad de la sentencia de primera instancia mediante la cual se absolvió a la entidad demandada de reconocer cualquiera de las pensiones reclamadas por falta de requisitos legales.

Para ello se deberá partir, como hecho indiscutido e incuestionable, de la siguiente serie de situaciones:

i. Que el demandante nació el 15 de octubre de 1941 y que estuvo vinculado laboralmente al servicio del MUNICIPIO DE MEDELLÍN entre el 27 de enero de 1971 y el 12 de abril de 1992 en cargos como Jefe de Departamento de Contabilidad adscrito a la Secretaría de Hacienda, lo que dio lugar al reconocimiento por parte de esa entidad de una pensión de jubilación según Resolución N° 152 del 8 de mayo de 1992 y con fundamento en la Ley 33 de 1985.

ii. Tampoco es materia de discusión en el proceso el hecho de que no fue afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por parte de la Universidad demandada y en esa medida no se hicieron los aportes correspondientes al sistema de pensiones.

iii. De otro lado, es clara la existencia de una relación laboral entre las partes bajo la modalidad de contrato de trabajo por hora cátedra, de manera discontinua entre el mes de enero de 1976 y el 25 de julio de 2005, lo cual fue declarado en la propia sentencia que se revisa de conformidad con la amplia prueba documental aportada al proceso, consistente en los diversos contratos de trabajo suscritos entre las partes y las respectivas liquidaciones con el pago de prestaciones sociales y vacaciones de cada año.

De aquellos contratos mencionados, se destaca el hecho de que la vinculación tuvo como propósito la prestación de los servicios como docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana, lo que se hacía mediante contrataciones semestrales o anuales pero determinado por la duración de cada semestre académico en la Universidad. Además, para la ejecución de esa labor contratada, se tenía establecida una duración de “2 horas semanales”, lo que ocurrió en la mayoría de los contratos aportados al expediente y que corresponden a los años 1994, 1995, 1996, 1999, así como en los suscritos en los meses de febrero de 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005 y según lo corroborado por el propio demandante al momento de absolver el interrogatorio de parte.

Ahora, si bien es cierto el demandante tiene en la actualidad más de 60 años de edad y prestó sus servicios como docente hora cátedra al servicio de la demandada por más de 20 años, no por ello puede concluirse inexorablemente que se ha causado una pensión de jubilación y mucho menos una de vejez en los términos del Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta, especialmente, el hecho de que durante esos 20 años la labor fue desarrollada únicamente durante dos horas a la semana.

De todas maneras, es preciso tener en cuenta, respecto al primer caso, que no se advierte posibilidad de que se acuda a norma alguna en específico que contemple la pensión de jubilación que se reclama,

lo que podría ser un texto convencional existente en la institución demandada o bien normas de carácter legal que la consagren. Además, debe decirse que en virtud de la vinculación del demandante a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, no es viable la aplicación de norma alguna relacionada con pensiones de jubilación del sector público por cuanto la vinculación y la propia universidad, tienen una naturaleza de carácter privado.

En ese caso, el del sector privado, bien se sabe que el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo establecía la obligación directa de los empleadores de asumir el pago de las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida de sus trabajadores, pero previó que dejarían de estar a su cargo cuando el riesgo correspondiente fuere asumido por el entonces denominado Instituto Colombiano de Seguros Sociales.

Esta última circunstancia sucedió, en principio, con la expedición del Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 - o Reglamento General de los Seguros de IVM -, en virtud del cual el Seguro Social asumió el riesgo de vejez en sustitución de las pensiones de jubilación que correspondían a los empleadores, lo que se dio en un comienzo sólo en determinadas zonas del país como el Municipio de Medellín con posterior extensión gradual de la cobertura.

En esas condiciones, para la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA no puede surgir obligación alguna de reconocer a su cargo una pensión y mucho menos bajo la denominación de pensión de jubilación, ya sea completa o proporcional, por ser una obligación que desde mucho tiempo atrás dejó de estar a su cargo como empleador.

En lo que al segundo caso se refiere, esto es, la pensión de vejez, las pensiones contempladas en el Decreto 758 de 1990 tienen como fundamento una afiliación al sistema que para esa época correspondía

al INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGUROS SOCIALES, entidad que sería la encargada de su reconocimiento una vez acreditada la edad requerida y el número mínimo de semanas de cotización establecido.

Sin embargo, tal situación no ocurrió en este caso en el que no hubo afiliación alguna del trabajador de modo que lo procedente sería, a lo sumo, la posibilidad de trasladar al Sistema General de Pensiones una reserva actuarial, título pensional o calculo actuarial derivada de esa omisión al deber de afiliar a sus trabajadores para que posteriormente esas semanas se contabilicen para todos los efectos prestacionales a satisfacción del fondo de pensiones.

A propósito de lo anterior, con la Ley 100 de 1993 en virtud de la adopción en Colombia del nuevo esquema de seguridad social integral, vino a instituirse la figura del Bono Pensional, o más concretamente, la del título pensional, que corresponde al cálculo actuarial que están obligados a trasladar al Instituto de Seguros Sociales las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones entronizado en la ley 100 de 1993, efectuaban directamente el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con los trabajadores que seleccionen el Régimen de Prima Media.

Sin embargo, frente a tal posibilidad no se realizará pronunciamiento alguno en tanto no fue ese el objeto del proceso, ya que no fue planteado siquiera como una pretensión alternativa dentro de las que se incluyeron en la demanda, lo que atentaría contra el principio de congruencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso según el cual *“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que éste código contempla...”*

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de agosto de 2021.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d5e28a8334b4111de3c1e7a1fca5b8d6a415492d800d57abc2314e2210087697**

Documento generado en 04/08/2022 01:55:15 PM



Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>